



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
**9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”**

Buenos Aires, de agosto de 2022.

VISTO:

El recurso interpuesto por la demandada el 12/03/21 contra el pronunciamiento del 28/12/20; y

CONSIDERANDO:

1º) Que, mediante pronunciamiento del 28/12/20, el *a quo* **revocó** la resolución 62/2019 (DV DEOB), mediante la cual se había determinado de oficio, con carácter parcial, la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias de Telecom Argentina S.A. (“Telecom”), por el período fiscal 2012, con más sus intereses resarcitorios y una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias). Asimismo, impuso las costas a la vencida (v. INLEG-2020-90784804-APN-VOCV#TFN).

Para así decidir, destacó que el Fisco Nacional había impugnado la deducción de ciertos gastos computados por Telecom y vinculados -directa o indirectamente- a la obtención de dividendos pagados por Telecom Personal S.A., calificados como “no computables” por la ley del Impuesto a las Ganancias (“LIG”).

A continuación, detalló la normativa vigente en materia de deducciones y reseñó criterios doctrinarios y jurisprudenciales que consideró aplicables a la cuestión en debate.

Señaló que la voluntad del legislador había estado orientada a establecer una diferencia técnica entre los conceptos de *ganancia no gravada o exenta* y *ganancia no computable*, y que los dividendos, no obstante estar gravados, estaban conceptualizados dentro de esta última categoría. En ese mismo orden de ideas, precisó que sólo las ganancias no gravadas o exentas se encuentran mencionadas expresamente en la regla de prorrateo establecida en el art. 80 de la LIG y en el art. 117 de su decreto reglamentario, en tanto la categoría “no computable” admitía la deducción de todos los gastos necesarios para su obtención, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 64 de la LIG.

Agregó que el referido artículo aceptaba en forma expresa la deducción de los gastos necesarios para la obtención de rentas no computables “a



condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen (el Impuesto a las Ganancias) y que, como dice la norma, respeten las limitaciones establecidas en esta ley”.

En ese contexto, sostuvo que la asimilación de las rentas no computables a las rentas exentas y no gravadas para el cálculo del prorrateo de gastos previsto en el art. 80 de la LIG, hacía que el art. 64 de ese mismo cuerpo legal —que posibilita la deducción de los “*gastos necesarios*”— perdiera todo sentido. Bajo tales premisas, concluyó que las rentas no computables debían mantenerse al margen del cálculo del prorrateo de gastos comunes, por lo cual correspondía revocar el ajuste fiscal en autos.

2º) Que, disconforme con la decisión, el **Fisco Nacional** apeló y expresó agravios el 12/03/21 y el 6/04/21, respectivamente, que fueron replicados por su contraria el 26/05/21 (v. RE-2021-22060864-APN-DTD#JGM, IF-2021-29633779-APN-DTD#JGM y IF-2021-46984502-APN-DTD#JGM).

En sustancia, sostiene que el fallo del *a quo* resulta arbitrario, en tanto se aparta de las constancias de la causa y de la normativa aplicable. Al respecto, señala que en atención al carácter no computable de los dividendos, corresponde estar a lo previsto en el art. 17 de la LIG (actual art. 23, t.o. 2019) cuyo texto establece la prohibición de deducir como gasto una erogación vinculada con ganancias no computables. Cita jurisprudencia en torno a su tesitura (Sala V, *in re* “Macchiavello, Silvia Adriana”, sent. del 16/12/05 y Sala III, *in re* “Banco Mariva SA C/EN –AFIP s/DGI”, sent. del 29/11/18).

Manifiesta que si bien desde un plano técnico “*podríamos aceptar que los términos ‘exención’ y ‘no cómputo’ pueden encontrar acepciones o interpretaciones distintas, en el caso operan con matices claramente análogos, al menos en lo que refiere a la imposibilidad de deducir como gasto una erogación que se relaciona con una renta que no cabe tener en consideración o no está comprendida en la determinación de la ganancia gravada en el impuesto discutido*” (cfr. art. 17, tercer párrafo de la LIG).

Señala que, en el Impuesto a las Ganancias, los gastos relacionados con dividendos constituyen deducciones no admitidas, resultando indiferente el carácter de renta exenta o no computable por no considerarse a dichos gastos como necesarios “*ya que estos, para que tengan justamente tal carácter, deben responder a los requisitos de estar destinados a obtener, mantener o conservar ganancias gravadas, lo que no ocurriría tampoco dentro de dicha calificación de rentas no computables*”. En otras palabras, la inexistencia de computabilidad





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
**9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”**

provocaría —a su criterio— la improcedencia de la deducción de los gastos vinculados con la obtención de los dividendos.

Subraya la interpretación jurisprudencial sustentando por la Sala V del Fuero en la causa “Macchiavello, Silvia Adriana” -fallo *supra* cit.-, conforme la cual *“El resultado que distribuye la sociedad pagadora por medio de dividendos ya fue objeto del correspondiente neto de los gastos necesarios para la producción de dicho rendimiento, por lo tanto los mismos ya son resultados netos que fueron sometidos al impuesto, y es por todo ello por lo que no corresponde gravarlos nuevamente en cabeza del accionista que nada habrá de pagar por ello en concepto de este impuesto y, por lo tanto, nada habrá que deducir a su respecto”*.

Alega que adoptar una postura contraria, implicaría una indebida reducción de la base imponible del gravamen, pues los costos incurridos para producir rentas no imponibles se transformarían en quebrantos computables; mecanismo *“imposibilitado en la propia economía de la ley del impuesto”*.

Por tales motivos, peticiona que se revoque la sentencia apelada, con imposición de costas a la actora.

3º) Que, en oportunidad de replicar el memorial, **Telecom** sostiene que la arbitrariedad alegada carece de sustento en tanto el *a quo* fundamentó el pronunciamiento de conformidad con la normativa, jurisprudencia y doctrina aplicable al caso. Añade que tampoco se apartó de las constancias de la causa por lo que el agravio formulado se traduciría en una mera discrepancia con la resolución apelada.

Cuestiona la interpretación sustentada por el Fisco Nacional en función a la calificación expresa de ganancia “no computable” que el art. 64 de la LIG atribuye a los dividendos; caracterización que -a su entender- revela la voluntad manifiesta del legislador de establecer una distinción con respecto de la ganancia “no gravada”, “no comprendida” o “exenta”. De lo contrario -según expresa-, se incrementaría artificial y antijurídicamente la ganancia neta gravada del sujeto, producto de la impugnación de los gastos presuntamente vinculados a ella, lo cual es precisamente lo que la norma y el legislador han pretendido evitar.

Agrega que la doctrina y la jurisprudencia son contestes al sostener la prohibición de analogía en la aplicación de las normas tributarias materiales, todo lo cual enervaría la tesis del Fisco; máxime teniendo en cuenta el principio



interpretativo que establece que donde la ley no distingue, el intérprete tampoco debe hacerlo.

Diferencia el caso bajo análisis del supuesto reglado en el art. 46 de la LIG relativo a las ganancias gravadas de una persona física. Al respecto, precisa que, para una persona jurídica, el tipo de renta que representa el dividendo obtenido constituye una renta de tercera categoría “no computable”, conforme lo previsto en el artículo 64 de la LIG que, además, estipula la deducción de los gastos; mientras que para una persona física los dividendos constituyen una renta de segunda categoría (regulada en el artículo 46 de la LIG) que, a diferencia del art. 64 *supra* referenciado, no establece la deducción de los gastos vinculados a dichos beneficios.

Asimismo, alega que la renta cuestionada tampoco se encuentra comprendida dentro de las ganancias exentas enumeradas en el art. 20 del citado ordenamiento, circunstancia que acredita la improcedencia de la interpretación analógica ensayada por la demandada. Ello, en función a la jurisprudencia de la Corte federal, según la cual las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicación de las normas que las establezcan.

Añade que el segundo párrafo del art. 64 habilita expresamente la deducción impugnada por la AFIP bajo la condición de que no hubiera sido ya considerada en la liquidación del gravamen. En consecuencia, señala que la inclusión de tales gastos dentro del prorrateo reglado por el art. 80 de la LIG implicaría tener por no escrito y transformar en letra muerta lo dispuesto en la LIG, máxime cuando la norma no requiere un gran esfuerzo interpretativo.

En otro orden de ideas, pone de manifiesto que el pronunciamiento “*Santa Maria S.A.*”, sent. del 30/10/70, citado por el recurrente, tampoco resulta aplicable al caso en tanto la normativa vigente en ese momento era sustancialmente diferente a la aplicable en los autos de marras.

Asevera que el término “no computable” responde a una técnica legislativa mediante la cual se pretendió atribuir la renta gravada exclusivamente al balance fiscal de uno solo de los sujetos vinculados a ella (sociedad/accionista), lo cual no implica que tales ingresos no hayan sido alcanzados por el tributo. Seguidamente, efectúa un análisis de la evolución legislativa en la materia y señala que la introducción del concepto de ganancias “no computables” respondió a la expresa voluntad del legislador de establecer una diferencia de aquellas con las ganancias “no gravadas” y/o “exentas”, por tratarse de ganancias alcanzadas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
**9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”**

que ya habían tributado el impuesto en cabeza de la sociedad pagadora de los dividendos.

Arguye que el Fisco no probó la supuesta vinculación de los gastos impugnados con la obtención de los dividendos e insiste en que tales erogaciones están motivadas en su actividad principal, de la que obtiene su principal fuente de ingresos, todo lo cual no ha sido controvertido por el ente recaudador.

Sostiene que el criterio expuesto en el dictamen 65/2004 (DI ATEC) resulta erróneo por cuanto considera a los dividendos como rentas “exentas” o “no gravadas”, contraviniendo abiertamente el mandato legal.

Subsidiariamente, mantiene todos los argumentos esgrimidos en su escrito de apelación por ante el Tribunal Fiscal, a los cuales se remite *brevitatis causae*. Al respecto, efectúa las siguientes consideraciones:

(i) El prorrateo de gastos resulta improcedente habida cuenta de que la totalidad de las erogaciones corresponden a la actividad principal de Telecom, vinculada a la prestación del servicio de telecomunicaciones. Afirma que los gastos de administración no se relacionan con la tenencia de acciones y la percepción de dividendos, los cuales no comportan su principal fuente de rentas sino que, por el contrario, representan ingresos incidentales para la compañía.

(ii) La aplicación del mecanismo *supra* aludido conllevaría a un apartamiento injustificado del dictamen 33/2012 aplicado a Nortel Inversora SA (antecesora de Telecom), en cuanto establecía que los gastos dirigidos a la actividad principal de la sociedad debían ser imputados directamente a dicha fuente. Sobre esa base, aduce que el Fisco incurrió en una manifiesta vulneración de la doctrina de los actos propios y la confianza legítima.

(iii) Si los dividendos son rentas que no han de computarse a los fines de la determinación del gravamen tampoco resultarían “computables” a los efectos del prorrateo regulado por el artículo 117 del decreto reglamentario de la LIG;

(iv) El ajuste fiscal resulta arbitrario en tanto realiza una estimación de oficio, basada en indicios y presunciones, obviando que tal procedimiento es de carácter excepcional y resulta aplicable únicamente cuando no hubiere documentación respaldatoria, lo cual no ocurre en el *sub lite*.

(v) En caso de que se considerase procedente la impugnación de gastos vinculados a los dividendos, peticiona que se realice una reliquidación



de la determinación apelada considerando únicamente como vinculados a esa ganancia: (a) los gastos directos asignados por la empresa a fs. 64 del expediente administrativo; (b) los gastos directos correspondientes al Impuesto a los Débitos y Créditos abonado; o en última instancia, (c) los gastos asignados directa e indirectamente por la fiscalización a fs. 723, 724 y ss. de las actuaciones administrativas. A tales fines, mantiene la prueba pericial contable ofrecida ante el *a quo*.

(vi) Ante el eventual rechazo de su posición, solicita que: (a) se le apliquen los beneficios del art. 46 de la ley 27.260, teniendo en cuenta la presentación de la declaración jurada de conformación de datos del art. 85, del citado ordenamiento; (b) se declare improcedente la aplicación de intereses resarcitorios, en tanto se verifican circunstancias excepcionales para su eximición; y (c) no se le imponga multa alguna en función a la configuración de un error excusable eximente de responsabilidad infraccional (cfr. IF-2021-47291657-APN-DTD#JGM).

4º) Que, conforme surge de las *constancias de la causa*:

(i) El 22/6/15, la AFIP inició la fiscalización del Impuesto a las Ganancias de la actora correspondiente al período fiscal 2012 a través de la O.I. 1349785 en el marco de la cual le requirió que aportara el detalle de gastos contabilizados y vinculados en forma directa con el cobro de dividendos (cfr. fs. 2 y 62, Impuesto a las Ganancias, cuerpo I de los antecedentes administrativos);

(ii) El 7/4/16 Telecom precisó que “*los únicos gastos vinculados al proceso de cobro de dividendos son los costos laborales del personal interviniente y sus gastos asociados*” que cuantificó en **\$28.441** (cfr. fs. 64, Impuesto a las Ganancias, cuerpo I de los antecedentes administrativos);

(iii) El 26/9/16, el Fisco Nacional notificó a la actora las inconsistencias detectadas con relación al gravamen fiscalizado en función a la impugnación de gastos directos e indirectos por prorrateo vinculados a ingresos no computables, esto es, dividendos percibidos en el ejercicio fiscal 2012. Puntualmente, destacó que el monto de gastos no deducibles ascendía \$393.118.517 y el impuesto presuntamente adeudado por Telecom a **\$137.591.499,85** (cfr. fs. 127/132, Impuesto a las Ganancias, cuerpo I de los antecedentes administrativos);

(iv) El 3/11/16 la actora puso de manifiesto que el ajuste practicado por la AFIP contenía manifiestos errores de cálculo, en tanto sostuvo que los gastos de comercialización se encontraban identificados únicamente con la prestación de servicios de telecomunicaciones y, por ende, afectados total y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
**9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”**

exclusivamente a la generación de ganancias gravadas, por lo que no correspondía aplicarles ningún prorrateo. Asimismo, indicó que los gastos de administración tampoco debían participar del prorrateo, con excepción de la parte oportunamente informada, y consideró que también debían excluirse los gastos financieros por cuanto habían tenido origen en deudas comerciales y no financieras (cfr. fs. 153/154, Impuesto a las Ganancias, cuerpo I de los antecedentes administrativos);

(v) El 6/6/17 la AFIP notificó un nuevo ajuste indicando que el total de gastos no deducibles ascendía a \$104.764.112 y el impuesto debido a **\$36.667.439,36** (cfr. fs. 171/173, Impuesto a las Ganancias, cuerpo I de los antecedentes administrativos);

(vi) El 28/06/17 Telecom presentó su descargo y puso de manifiesto que los gastos de administración y financieros impugnados no se relacionaban ni directa ni indirectamente con los ingresos no computables derivados del cobro de dividendos ni tuvieron por objeto, mantener y conservar aquéllos ni su fuente generadora. A fin de acreditar dicha información, acompañó una certificación contable con el detalle de los conceptos registrados en las cuentas contables relacionadas con gastos financieros y administrativos (fs. 186/195vta., Impuesto a las Ganancias, cuerpo I y fs. 208/212, Impuesto a las Ganancias, cuerpo II de los antecedentes administrativos);

(vii) El 23/08/17, el organismo recaudador cursó un nuevo requerimiento a Telecom solicitando información sobre el tratamiento del Impuesto a los Débitos y Créditos vinculado con los pagos de dividendos y la apertura de los gastos administrativos en casa central y sucursales (fs. 214, Impuesto a las Ganancias, cuerpo II de los antecedentes administrativos);

(viii) El 6/9/17 y el 20/9/17, la actora cumplió con el requerimiento y detalló que el 66% del Impuesto a los Débitos y Créditos había sido contabilizado en la cuenta de resultado negativo N901010003 por \$4.229.329,86 y el 34% restante (\$2.178.745.69) en una cuenta patrimonial, por calificar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Respecto a los gastos administrativos, precisó que dentro de los atribuibles a los empleados de la Sede Central, debía hacerse una clasificación entre las funciones que “*desarrollan tareas indirectamente relacionadas con el cobro de dividendos*” pero que complementan a la actividad principal de la compañía y “*deben existir independientemente de que se perciban o no dividendos*”, y aquéllas funciones



que responde exclusivamente a la prestación del servicio de telecomunicaciones “por lo que no existe ninguna relación ni directa ni indirecta con la percepción de dividendos”. Ello así, puntualizó que “de las clasificaciones citadas surge que de los \$390.129.530, \$16.280.521 (...) serían los costos de sueldos y cargas sociales asociados al personal que tiene alguna injerencia indirecta en las funciones de percepción de dividendos”. Por su parte, detalló que \$17.654.776 del rubro “Honorarios” “serían los costos de honorarios asociados indirectamente a las funciones de percepción de dividendos”. Seguidamente, cuantificó en \$498.438 los montos atribuibles a “Mantenimiento, materiales e Insumos” correspondientes a “funciones afectadas a la percepción de dividendos” y a “costos de mantenimiento asociados indirectamente a las funciones de percepción de dividendos”, respectivamente. Por último, asignó \$1.580.447 al rubro “Otros gastos” asociados indirectamente a las funciones de percepción de dividendos (cfr. fs. 215/256, Impuesto a las Ganancias, cuerpo II de los antecedentes administrativos);

(ix) El 30/10/17, la fiscalización actuante presentó su informe de inspección conforme el cual el total de gastos no deducible ascendía a \$12.477.768 y el impuesto determinado a **\$4.351.818,82** (cfr. fs. 257/285, Impuesto a las Ganancias, cuerpo II de los antecedentes administrativos);

(x) En el marco de las tareas adicionales encomendadas por la Jefatura de la División Determinaciones de Oficio II (fs. 287/292, Impuesto a las Ganancias, cuerpo II de los antecedentes administrativos), y en cumplimiento al requerimiento cursado el 09/01/18 (fs. 293, Impuesto a las Ganancias, cuerpo II de los antecedentes administrativos), Telecom aportó la documentación de respaldo solicitada (v. fs. 296/707vta., Impuesto a las Ganancias, cuerpos II, III y IV de los antecedentes administrativos), y el 06/03/18 manifestó que los “Gastos Financieros” no tenían ninguna relación con la obtención de dividendos y explicó su criterio (cfr. fs. 708, Impuesto a las Ganancias, cuerpo IV de los antecedentes administrativos);

(xi) El 8/03/18, la AFIP procedió a notificar un nuevo ajuste fiscal según el cual el total de gastos no deducibles ascendía a \$11.004.958 (directos - \$4.257.771- e indirectos -\$6.747.188-) y el impuesto determinado resultante era de **\$3.851.735** (con. fs. 723/724, Impuesto a las Ganancias, cuerpo IV de los antecedentes administrativos);

(xii) El 15/03/18 la actora presentó su descargo e indicó que el prorrateo efectuado por el Fisco Nacional respecto de los “Gastos de Administración” era inaplicable por cuanto “responden a la estructura necesaria





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”

para desarrollar la actividad principal generadora de ingresos gravados (cfr. Dictamen DAT 32/12)”. Además, aseveró que “para ambos tipos de gastos (financieros y de administración) el prorratio tampoco es aplicable porque no se relacionan ni directa ni indirectamente con la tenencia de acciones o la percepción de dividendos —renta no computable— (cfr. Dictámenes DAT 65/04, 13/96, 62/03, 38/75, 92/94, 77/95 y 55/02)”. En dicha ocasión, puso de resalto que “en el caso bajo análisis existe una perfecta separación entre la fuente productora de la renta gravada —bienes empleados y gastos realizados para prestar el servicio de telecomunicaciones— y la fuente productora de la renta no computable —tenencia de las acciones de Telecom Personal S.A.— por lo que no hay bienes afectados a producir réditos de uno y otro tipo en forma indivisible”. En esa misma línea, puntualizó que con relación a los “Gastos Financieros”, la AFIP había prorratioado las cuentas “Intereses Leasing Financiero” (registra pasivos comerciales contraídos por la adquisición de equipos de computación activados como bienes de uso utilizados para la prestación del servicio de telecomunicaciones) y “Diferencia de cambio de otros pasivos” (refiere a la generada por las garantías de cumplimiento exigidas a los proveedores de obras de plantel exterior, fibra óptica, etc.), que están vinculadas con su actividad comercial principal. En lo atinente a los “Gastos Administrativos”, manifestó que no existía ninguna relación entre la porción de “Sueldos y Cargas Sociales, Honorarios, Mantenimiento, materiales e insumos y otros gastos de Administración” prorratioados y la percepción de dividendos; a excepción de los costos laborales del personal interviniente en la gestión de cobro de dividendos, cuyo detalle y funciones constan a fs. 64 del Cuerpo I de los antecedentes administrativos, y asciende a \$28.441; importe considerado por la fiscalización como “Asignación directa realizada por la Cía” (cfr. 729/736vta., Impuesto a las Ganancias, cuerpo IV de los antecedentes administrativos);

(xiii) El 21/05/18, la Jefatura de la División Determinaciones de Oficio “B” encomendó a la fiscalización actuante la realización de tareas complementarias (fs. 749/752, Impuesto a las Ganancias, cuerpo IV de los antecedentes administrativos); circunstancia que motivó el requerimiento de información adicional a la actora (fs. 753, Impuesto a las Ganancias, cuerpo IV de los antecedentes administrativos) que fue aportada a fs. 754/842 de los cuerpos IV y V de los antecedentes administrativos;



(xiv) El 2/07/18 la inspección presentó su informe dando cuenta de las tareas complementarias encomendadas y confeccionó una nueva liquidación por un total de gastos no deducibles de \$57.148.957,19 (\$4.229.330 por asignación directa y \$52.919.627,19 por “*Prorrrateo gs. Indirectos x Dividendos*”) y un impuesto determinado de **\$20.002.135,02**. Para así concluir, excluyó los “Gastos Financieros” del prorrrateo, consideró incluidos los siguientes “Gastos Administrativos”, a saber: (a) “Sueldos y Cargas Sociales empleados Madero – Casa Matriz fuera de Convenios Colectivos de Trabajo, correspondientes a la totalidad de los centros de costos” por \$155.429.521; (b) “Previsiones y Otros” por un importe de \$13.475.688,21; y (c) “Otros Gastos Administrativos” por \$139.125.219. Por último, excluyó los \$28.411 asignados en forma directa por la empresa en concepto de “Gastos Administrativos” (conf. 843/850, Impuesto a las Ganancias, cuerpo V de los antecedentes administrativos);

(xv) Mediante resolución 104/18, la AFIP confirmó vista a Telecom del ajuste propuesto, receptando las conclusiones del informe presentado por la fiscalización actuante. Así explicitó que el cálculo del coeficiente de gastos se compone de: (a) “*numerador: se consideró como ingresos exentos o no computables a los dividendos cobrados*”; (b) “*Denominador: se computaron como ingresos totales a los dividendos cobrados, los ingresos por ventas, los ingresos financieros y otros ingresos*”; y (c) “*Gastos sujetos a prorrrateo: se contemplaron a los efectos de la aplicación del coeficiente, los gastos de administración supra mencionados*”. Ello así, se determinó un coeficiente no deducible de 17,18%, que, aplicado sobre parte de los gastos de administración, arrojó un monto de gastos no deducibles de \$52.919.627. Asimismo, se dejó constancia de que Telecom tampoco había ajustado, a los fines impositivos, los gastos de asignación directa vinculados con ingresos no computables por \$4.229.330, relativos al Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios de los depósitos de los referidos dividendos (fs. 870/879, Impuesto a las Ganancias, cuerpo V de los antecedentes administrativos);

(xvi) El 20/12/18 Telecom presentó su descargo. En primer término fundó la inaplicabilidad del prorrrateo en los antecedentes fiscales citados por la propia fiscalización y en el dictamen (DAT) 33/12, según el cual “*aquellos gastos que estén dirigidos a la actividad principal de la sociedad (...) deberán imputarse directamente a dicha fuente*”. Ello así, sostuvo que, en el caso, “*resulta evidente que los gastos de administración impugnados están dirigidos a la prestación del servicio de telecomunicaciones –que es su actividad principal- y no a la obtención de dividendos*” (...) “*la totalidad de dichos gastos (...)*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”

hubieran existido igualmente, aunque no hubieran existido rentas por dividendos”. En segundo término, puso de resalto que el dictamen 33/12 estaba dirigido a su antecesora Nortel Inversora S.A., quien conformó el criterio fiscal según el cual *“aquellos gastos que estén dirigidos a la actividad principal de la sociedad, que es la de inversión en acciones de empresas controladas y cuya renta principal es la obtención de los dividendos no computables (Artículo 64 de la ley) en la base imponible del impuesto a las ganancias, deberán imputarse directamente a dicha fuente y no deducirse en la determinación del tributo”.* En consecuencia, alegó que su inaplicabilidad resultaba violatoria de la seguridad jurídica y de la doctrina de los actos propios. En tercer lugar, esgrimió que *“el prorrateo es inaplicable a los gastos de administración porque éstos no se relacionan, ni directa ni indirectamente, con la tenencia de acciones o la percepción de dividendos”* y consignó que *“a todo evento, los únicos gastos y costos que podrían llegar a considerarse vinculados al cobro de dividendos se han detallado en la respuesta brindada con fecha 7/4/16”*, destacando que *“existe una perfecta separación entre la fuente productora de la renta gravada (bienes empleados y los gastos realizados para prestar el servicio de telecomunicaciones) y la fuente productora de la renta no computable (tenencia de las acciones de Telecom Personal S.A.), por lo que no existen bienes afectados a producir réditos de ambos tipos en forma indivisible”.* A tales efectos, remitió a las certificaciones contables acompañadas en esa oportunidad. En cuarto lugar, hizo referencia a la improcedencia del cómputo de los dividendos como ingresos exentos o no gravados, en atención a su calidad de *“no computables”*. Por último, se agravio respecto a los intereses resarcitorios y el sumario instruido (cfr. fs. 894/1041vta., Impuesto a las Ganancias, cuerpos V y VI de los antecedentes administrativos);

(xvii) Mediante resolución 62/2019, la AFIP determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias de Telecom por el período fiscal 2012 en \$334.576.769,34, le intimó el pago de \$18.168.464,33 por dicho gravamen, con más \$41.193.111,72 y \$12.717.925,03 en concepto de intereses resarcitorios y multa, respectivamente (v. fs. 1064/1093, Impuesto a las Ganancias, cuerpo VI de los antecedentes administrativos). En lo que aquí interesa, sostuvo que:

- De acuerdo al régimen legal aplicable, *“el método a través del cual se procederá a concretar la imputación de un gasto consistirá, en primer lugar, en individualizar y atribuirlo en forma directa a cada fuente productora de*



la renta, y sólo cuando aquél se vinculara a la generación de distintos tipos de rentas, se lo atribuirá a cada uno de éstas en la parte o proporción respectiva”;

- En el supuesto de que el sujeto pasivo hubiese obtenido rentas gravadas, no gravadas y exentas, “y existan gastos que sean comunes a ambas categorías de ganancias, se aplicará como procedimiento general de imputación de tales cargos el prorrateo de los mismos en base al porcentaje de las rentas gravadas con relación a la ganancia total obtenida por el sujeto”;

- “a los efectos del prorrateo mencionado, las rentas no computables y exentas deben recibir similar tratamiento. Un criterio distinto conduciría a que los costos incurridos para producir rentas no imponibles se transformen en quebrantos computables, lo cual está imposibilitado en la propia economía de la ley del impuesto”;

- El resultado distribuido por la sociedad pagadora de dividendos ya fue objeto del correspondiente “neteo” de los gastos necesarios para la producción de dicho rendimiento, de modo que comportan resultados netos que ya fueron sometidos al impuesto, “por lo que no corresponde gravarlos nuevamente en cabeza del accionista que nada habrá de pagar por ellos en concepto de este impuesto y, por lo tanto, nada habrá de deducir a su respecto”;

- Según los Estados Contables de Telecom al 31/12/12, del total de su Activo (esto es, \$13.241 millones), \$4.922 millones corresponden a las participaciones accionarias en Telecom Personal S.A., lo que representa el 37,17%; extremo que “configura una diferencia respecto de lo analizado en el Dictamen 33/2012 (DAT)” que calificó como “ganancias incidentales” a aquellas derivadas de “intereses ganados y diferencias de cambio (...) de inversiones y préstamos otorgados que representan una parte mínima del patrimonio comparado a las inversiones permanentes en acciones”;

- Los “Gastos de Administración” excluyen los “Gastos de Comercialización” (esto es, los realizados por el ente en relación directa con la venta y distribución de sus productos o servicios) y comprenden a “los gastos indirectos que atañen, en principio, a la empresa en su conjunto”;

- Según el Anexo H de los Estados Contables cerrados al 31/12/12, el gasto más representativo dentro de los “Gastos Administrativos” es “Sueldos y Contribuciones” y se consideraron sujetos a prorrateo: (a) “los correspondientes a empleados de casa matriz y personal fuera de convenio” dado que el resto del personal de casa matriz —aquél dentro de convenio— y el personal de sucursales “sólo desarrollan tareas específicas inherentes a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”

actividad principal de la sociedad –prestación de servicio de telecomunicaciones-”; y (b) “los sueldos y cargas sociales de empleados de casa matriz que están fuera de convenio, afectados a la totalidad de los centros de costos (...) por cuanto la administrada no logró demostrar cabalmente, si alguno de los dependientes y/o centro de costos –contemplados en la base de cálculo del ajuste- no guardaba relación con la percepción de dividendos”;

- En lo atinente a los restantes “Gastos de Administración” (“Honorarios”, “Mantenimiento e Insumos” y “Otros gastos”), Telecom había indicado que no contaba con la discriminación de aquéllos que correspondían a casa matriz y/o a sucursales y que *“debiera recurrirse a los comprobantes respaldatorios de los mismos”* a fin de *“obtenerse su naturaleza y el lugar de prestación”*. En consecuencia, se consideraron el 100% de ellos;

- En conclusión, determinó que la suma de \$308.030.426 constituía gastos indirectos *“sobre los cuales la contribuyente no logró demostrar ni fáctica ni fehacientemente que no guarden una vinculación, exclusivamente, con la obtención de ganancias gravadas, como así tampoco con la obtención de ganancias exentas/no computables, por lo que no resultan deducibles en su totalidad, debiendo someterse a prorrateo”;*

- Telecom tampoco ajustó, a los fines impositivos, los gastos de asignación directa por \$4.229.330 en concepto de Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios pagado sobre los depósitos de los dividendos percibidos;

- En lo atinente a las conclusiones vertidas en las certificación contables con relación a la falta de vinculación de los gastos relacionados con el cobro de dividendos, la AFIP arguyó que *“el profesional interviniente no explica cómo arriba a dicha conclusión (...) siendo que los concepto facturados de la documentación que formó la muestra, son escuetos y poco específicos”* y, manifestó que el profesional omitió explicitar por qué un gasto como *“Vigilancia”* o *“Limpieza”* se encuentra vinculado a la actividad principal, si *“atraviesa toda la firma en su conjunto”;*

(xviii) El 6/8/19, Telecom interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal (cfr. IF-2019-70161361-APN-DTD#JGM). Los agravios expuestos responden, en esencia, a cuatro líneas argumentales: (a) la procedencia de la deducción de los gastos incurridos para la obtención, mantenimiento y conservación de las rentas no computables, de acuerdo a lo dispuesto en el



segundo párrafo del art. 64 de la LIG; y (b) la improcedencia del prorrateo de gastos en tanto responden al desarrollo de la actividad principal de Telecom (prestación del servicio de telecomunicaciones) a la que resultan asignables directamente, de conformidad con el criterio expuesto en el dictamen 33/12; (c) la necesidad de reliquidar la determinación practicada, considerando que los gastos vinculados a la obtención de dividendos son los atribuidos en forma directa por Telecom a fs. 64 de las actuaciones administrativas, el Impuesto a los Débitos y Créditos abonado por la acreditación de los citados dividendos, o bien los gastos asignados “*directa e indirectamente*” por la fiscalización a fs. 723 y ss. de las actuaciones administrativas (argumento subsidiario); y (d) a todo evento, planteó la aplicación de los beneficios contemplados en el art. 46 de la ley 27.260, en función de lo dispuesto por el art. 85 del citado texto normativo, la improcedencia de la aplicación de intereses resarcitorios y de la multa impuesta en atención a la configuración de un error excusable;

(xix) El 7/11/19, la AFIP contestó el recurso de la actora (v. IF-2019-100092497-APN-DTD#JGM);

(xx) Mediante presentación del 19/11/19, la AFIP informó que “*el ajuste impositivo practicado a la contribuyente que se encuentra en trámite bajo el expediente del asunto, es eminentemente técnico, y por aplicación de la IG 1008/17 (DI PYNF), modificada por la 1022/17 (DI PYNF), no le caben los beneficios del artículo 46 de la Ley 27.260*” (IF-2019-102946336-APN-DTD#JGM); y

(xxi) El 20/10/20 el Tribunal Fiscal resolvió no abrir a prueba el expediente. Puso de resalto que la prueba pericial contable fue ofrecida en forma subsidiaria, delegando su producción a criterio de ese organismo, y consideró que “*no resulta atendible en esta etapa del proceso*”. Telecom hizo expresa reserva de instar su producción (cfr. PV-2020-70680826-APN-VOCV#TFN y IF-2020-73474575-APN-DTD#JGM).

5º) Que, la **cuestión en debate** requiere determinar si los gastos vinculados al cobro de dividendos en el período fiscal 2012 resultaban deducibles del Impuesto a las Ganancias y, en su caso —esto es, de considerarse no deducibles—, la legitimidad del prorrateo efectuado por el Fisco Nacional para sustentar su pretensión.

6º) Que, en primer término, es conveniente reseñar **la normativa vigente** en el período fiscal aquí involucrado. Ello así, cabe tener en consideración lo establecido en los artículos 17, 45, 46, 64, 69 bis y 80 de la LIG





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
**9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”**

(texto vigente con anterioridad a la reforma introducida por la ley 27.430 -B.O. 29/12/17-) y el artículo 117 del decreto 1344/98.

El **art. 17 de la LIG** dispone que *“Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga. Para establecer la ganancia neta sujeta a impuesto se restarán del conjunto de las ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta categorías las deducciones que autoriza el artículo 23. En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto”*.

A su turno, el **art. 45 del mismo cuerpo legal** reza, en su parte pertinente, que: *“En tanto no corresponda incluirlas en el artículo 49 de esta ley (referido a las ganancias de tercera categoría), constituyen ganancias de la segunda categoría: (...) i) Los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas en el inciso a) del artículo 69”*.

El **art. 46** establece que *“Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables, no serán incorporados por sus beneficiarios en la determinación de su ganancia neta. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o integrantes”*.

El **artículo 64** prescribe que *“Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta. A los efectos de la determinación de la misma se deducirán -con las limitaciones establecidas en esta ley- todos los gastos necesarios para obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o integrantes”*.

Por su parte, en el **artículo 69 bis**, se establece que *“Cuando los sujetos comprendidos en los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, así como también los indicados en el inciso b) del mismo artículo, efectúen pagos de dividendos o, en su caso, distribuyan utilidades, en dinero o en especie, que*



superen las ganancias determinadas en base a la aplicación de las normas generales de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, el 35% (treinta y cinco por ciento) sobre el referido excedente. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ganancia a considerar en cada ejercicio será la que resulte de detracer a la ganancia determinada en base a la aplicación de las normas generales de esta ley, el impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen de la ganancia que se distribuye o la parte proporcional correspondiente y sumarle los dividendos o utilidades provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación de dicha ganancia en el o los mismos períodos fiscales.”

El **art. 80** señala que *“Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Cuando medien razones prácticas, y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras”*.

Por último, el **art. 117 del decreto reglamentario de la LIG** precisa que *“A los efectos de la proporción de los gastos a que se refiere el primer párrafo del artículo 80 de la ley, cuando los mismos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, se entenderá que estas últimas comprenden también a los resultados exentos del gravamen”*.

7º) Que, a fin de interpretar las disposiciones a aplicar para resolver la cuestión bajo examen, resulta esclarecedor analizar sus **antecedentes normativos** y las modificaciones que fueron incorporadas por el legislador a lo largo del tiempo respecto al tratamiento de los dividendos en el Impuesto a las Ganancias.

El **art. 45, inciso f, de la ley 20.628** (B.O. 31/12/73) establecía que los dividendos de acciones en efectivo o en especie —incluidas acciones liberadas de sociedades constituidas en el país—, comportaban ganancias de segunda categoría —en tanto no correspondiese incluirlas como ganancia de tercera categoría—, en la medida que respondiesen a utilidades impositivas de la entidad. Asimismo, disponía que la inclusión de dichos beneficios como ganancia gravada en la pertinente declaración jurada daba derecho al cómputo como pago a cuenta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
**9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”**

de la obligación fiscal del ejercicio, de un importe igual al aumento de esta obligación producido por la inclusión del monto computable de los dividendos, hasta el límite del 15.50% sobre su monto y del 22 % cuando se tratase de los sujetos comprendidos en el inciso a del artículo 63, esto es, sociedades de capital.

Por su parte, el artículo 64 establecía que los beneficios impositivos obtenidos por las sociedades de capital y no distribuidos dentro de los plazos fijados por el Poder Ejecutivo, quedaban sujetos a la tasa del 29,50 %. Asimismo, disponía que *“... el gravamen ingresado conforme a lo dispuesto precedentemente dará lugar a un crédito de libre disponibilidad a favor del responsable en la medida en que se configure la posterior distribución de dichos beneficios”*. A su vez, el artículo 65 determinaba que *“... las retenciones practicadas de conformidad con lo dispuesto precedentemente podrán ser computadas por los beneficiarios de la renta en su declaración jurada anual”*.

La **ley 21.286** (B.O. 07/04/76) eximió los dividendos en acciones liberadas; sustituyó la redacción del art. 45, inciso f (omitiendo mencionar a los dividendos como ganancia de segunda categoría); autorizó a las personas de existencia visible a deducir de sus ganancias netas, en concepto de *“ganancias no imponibles”* las sumas correspondientes a *“utilidades y/o dividendos en efectivo o en especie percibidos (excepto acciones liberadas)”*; y derogó los artículos 64 y 65 *supra* referenciados.

Luego, la **ley 21.481** (B.O. 05/01/77) derogó la exención de los dividendos en acciones liberadas y dispuso su sujeción al Impuesto a las Ganancias, cualesquiera sean los fondos empresarios con que se efectúe el pago (conf. el art. 1º, puntos 10 y 26). Además, sustituyó el art. 23, inciso a, (dejando sin efecto tácitamente la deducción establecida en concepto de *“ganancia no imponible”* para personas de existencia visible), e incorporó el artículo 64 conforme el cual la sociedad debía practicar o no una retención del 17.50% sobre los dividendos pagados, según las condiciones de los beneficiarios. Además *estableció que los dividendos o utilidades en dinero, en especie o en acciones liberadas revestían la calidad de ganancia no computable a los efectos del gravamen y que no correspondía aplicar el artículo 86 (artículo 80 de la LIG supra reseñado) respecto de dicha especie de ganancias* (conf. art. 1º, puntos 13, 25 y 27).



La ley 23.260 (B.O. 11/10/85): (i) eximió los dividendos en acciones liberadas distribuidos a beneficiarios que se identifiquen ante la entidad emisora o agente pagador; (ii) incorporó el inciso g, al art. 45 conforme el cual “*Los dividendos en dinero y en especie que distribuyan a sus accionistas las sociedades comprendidas en el art. 63, inc. a)*” comportan ganancias de segunda categoría y a continuación del referido artículo aclaró que “*quedan íntegramente sujetos al impuesto, cualesquiera sean los fondos empresarios con que se efectúe su pago*”. Además, dispuso que “*Los dividendos en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables de la valuación de los bienes, no originados en utilidades líquidas y realizadas y siempre que se encuentren debidamente autorizados, no serán computables por los beneficiarios a los fines de la determinación de su ganancia neta. Al respecto no será de aplicación lo dispuesto en el art. 73*” (esto es, el art. 80 de la LIG arriba transcripto, conf. t.o. por el decreto 450/1986); (iii) sustituyó el art. 64 y estableció las retenciones a practicar cuando las sociedades efectuaran pagos de dividendos -excepto exentos o no computables-; (iv) reemplazó el art. 66 y dispuso que los dividendos percibidos por las sociedades de capital, serían considerados “*no computables*” a los efectos de la ley, **pero prescribió la aplicación del entonces artículo 73** (es decir, el art. 80 de la LIG, conf. t.o. por el decreto 450/1986); y (v) estableció que “*Los accionistas computarán como pago a cuenta de los dividendos mencionados en el art. 45 inc. g), el importe equivalente al aumento de la obligación fiscal del año, producido por la agregación de dichos dividendos a la liquidación del conjunto, hasta el límite del veintisiete con cincuenta por ciento (27,50 %) de los mismos*” (conf. art. 1º, puntos 6º, 12, 25, 27 y 38 de la ley 23.260).

Mediante la ley 23.760 (B.O. 18/12/89): (i) se mantuvo la exención de dividendos provenientes de acciones liberadas, sin más requisitos (conf. art. 31, punto 2º); (ii) se sustituyó el inciso g del art. 45 en virtud del cual se consideraban ganancias de segunda categoría a “*Los dividendos en dinero y en especie que distribuyan a sus accionistas las sociedades comprendidas en el art. 69, inc. a), los cuales --en su caso-- quedarán sujetos a la retención que, con carácter de pago único y definitivo, establece el art. 70* (vinculado a los porcentajes de retención)” (conf. art. 31, punto 4º); (iii) se reemplazó la redacción del art. 46 que, en su parte pertinente, rezaba: “*los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables, no serán incorporados por sus beneficiarios en la determinación de su ganancia neta*” (conf. art. 31, punto 5º); (iv) se reemplazó el artículo 64 por el siguiente: “*Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
**9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”**

no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta. A los efectos de la determinación de la misma se deducirán—con las limitaciones establecidas en esta ley— todos los gastos necesarios para obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen” (conf. art. 31, punto 7°); y (v) se derogó el art. 72 que establecía la aplicación del artículo 73 (artículo 80 de la LIG) respecto de las rentas no computables (conf. art. 31, punto 10).

La **ley 24.073** (B.O. 13/04/92) derogó la exención relativa a los dividendos en acciones liberadas (conf. art. 1°, punto 4°). A su turno, la **ley 24.698** (B.O. 27/09/96) incorporó a las utilidades en dinero o en especie como rentas de segunda categoría, conjuntamente con los dividendos (conf. art. 1°, inciso g).

La **ley 25.063** (B.O. 30/12/98) sustituyó la redacción de los artículos 46 y 64 de la LIG y dispuso que: (i) “*Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables, no serán incorporados por sus beneficiarios en la determinación de su ganancia neta. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o integrantes*”; y (ii) “*Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta. A los efectos de la determinación de la misma se deducirán —con las limitaciones establecidas en esta ley— todos los gastos necesarios para obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o integrantes*” (conf. art. 4°, incisos m y ñ, respectivamente). Además, incorporó el “*impuesto de igualación*” a continuación del art. 69 de la ley del gravamen (conf. art. 4°, inciso p).

8°) Que, el marco normativo *supra* descripto y las sucesivas modificaciones que lo precedieron: (i) demuestran que los dividendos derivan de **renta alcanzada** por el Impuesto a las Ganancias en cabeza de la sociedad que los distribuye y comportan **ganancia “no computable”** para los accionistas receptores a fin de evitar la doble imposición de una misma renta imponible; y (ii)



dan cuenta de las consecuencias que genera la calificación de rentas “no computables” en materia de deducibilidad de gastos a ellas asociados.

Con respecto al **punto (i)** se ha sostenido que “denominar ganancia no gravada o exenta a un dividendo, es una falsedad desde el punto de vista de la realidad económica, pues si bien el artículo 64 establece que los dividendos recibidos por esas sociedades no se computan en el cálculo de la ganancia neta de sus accionistas, ello no significa que éstos no reciban, con ese motivo, ganancias gravadas; lo que significa sí es que ya pagaron el impuesto. Y no podría cobrarse dos veces el mismo gravamen” (cfr. Vázquez, Francisco M., “El prorrateo de los gastos, incluso financieros, desde el punto de vista de las empresas” La Información, Tomo 71, p. 527, reseñado en el Digesto Práctico La Ley, Impuesto a las Ganancias, Lamagrande, Alfredo -director-, p. 431).

Así pues, se advierte que el carácter legal de los dividendos no resulta ser, **para su beneficiario**, el de “exentos” o “no gravados” o “no comprendidos”, sino el de “no computables”. En efecto, “la aplicación del régimen de retención estatuido por el art. 69.1 (vigente en el período aquí involucrado) cuando la sociedad emisora procede a su pago, lo convierte en gravado para el pago del impuesto” (v. Reig, Enrique J., “Impuesto a las Ganancias”, 12ª edición, Errepar, p. 426). Dicho de otro modo “los dividendos recibidos por una sociedad inversora, a su vez pagadora de dividendos, aun cuando no forman parte de su base imponible, (no son computables) se adicionan a sus resultados impositivos a los fines de determinar si los nuevos dividendos son susceptibles de tributación, por superar la ganancia que ha tributado el impuesto. Es decir que en la cadena que puede formarse en la distribución de dividendos, las utilidades se han gravado en la cabeza de la primera sociedad por sus utilidades impositivas y en la sociedad receptora mediante la aplicación de la tasa máxima de retención del tributo sobre el exceso de utilidades contables distribuidas respecto de aquéllas. Por lo tanto el dividendo recibido por la sociedad ha tributado el impuesto a la tasa máxima del gravamen. He aquí la justificación económica del mecanismo de liquidación impuesto a tenor del segundo párrafo del art. 64, ya que es la técnica que permite evitar, tras la gravabilidad de la fuente dispuesta, la duplicación del peso del gravamen” (cfr. Lauria, Rubén A., “Los Dividendos y el prorrateo de gastos e intereses”, Especial para el Digesto Práctico La Ley, Impuesto a las Ganancias, Lamagrande, Alfredo -director-, p. 425).

En efecto, esta Sala ha dejado sentado que las ganancias obtenidas por las sociedades mencionadas en el art. 69 de la ley del impuesto, que se distribuyen en forma de dividendos o utilidades, según corresponda, *son no computables para*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”

los beneficiarios que reciben dichas rentas, a fin de evitar una doble imposición (los sujetos que las distribuyen ya han tributado el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los dividendos o utilidades distribuidos). No obstante, una de las excepciones a ello es el denominado “impuesto de igualación” regulado en el artículo incorporado al art. 69, según el cual cuando se distribuyan utilidades o dividendos por encima de las utilidades determinadas de acuerdo a la LIG se deberá efectuar una retención con carácter de pago único y definitivo. El objetivo de la norma es evitar que numerosas exenciones se trasladen al accionista o socios vía distribución de dividendos o de utilidades (“HSBC New York Life Seguros de Vida SA (TF 28978-I) c/DGI”, sent, del 21/05/13).

De este modo, los ingresos no computables constituyen rentas en cabeza de quien las obtiene, *aun cuando dichas ganancias, por decisión del legislador, no deben ser tenidas en cuenta para determinar la ganancia neta* (cfr. Sala I, *in re* “Pampa Energía SA c/ EN- AFIP- DGI s/ Proceso de Conocimiento”, sent, del 4/04/18).

Consecuentemente, y tal como lo señaló el *a quo*, la expresión utilizada por el Congreso Nacional en el artículo 64 de la LIG no significa que esa renta (de tercera categoría) no se encuentre alcanzada por el tributo. Por el contrario, debe entenderse que es la sociedad la que debe liquidar e ingresar el gravamen correspondiente aplicable sobre los dividendos, de modo tal que el beneficiario no los computará en la determinación de su ganancia neta. De lo contrario, se generaría una doble imposición sobre la misma porción de renta, primero en cabeza de la sociedad y luego en cabeza del beneficiario (cfr. Sala V, *in re* “Grupo Financiero Galicia SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/11/18 y Sala II *in re* “HSBC Argentina Holdings SA – TF 48911-I c/ c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 1º/07/22).

En este escenario, es dable destacar que tampoco corresponde calificar la referida renta como “exenta” puesto que el artículo 18 inc. a, de la LIG vigente en el período bajo análisis, alude al ejercicio en que se imputarán los dividendos de acciones y los intereses de títulos, mientras que su artículo 20 no incorpora a los dividendos dentro de las exenciones allí previstas, todo lo cual ratifica su “gravabilidad” (cfr. Sala V, *in re* “Grupo Financiero Galicia SA c/



Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/11/18).

En ese orden de ideas, es conveniente recordar que las exenciones deben consagrarse de manera expresa y que no debe presumirse la imprevisión del legislador, (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros). También que las exenciones tributarias deben interpretarse estrictamente, resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador en cuanto a su propósito o de la necesaria implicancia de las normas que la establezcan (Fallos 287:79; 307:1083; 312:529; 314:1842; 315:257; 316:1115, entre otros).

Así pues, resulta claro que los dividendos constituyen renta gravada, extremo que torna improcedente el argumento del Fisco Nacional conforme el cual correspondería otorgarles el carácter de renta exenta o no sujeta al Impuesto a las Ganancias.

Ahora bien, en lo atinente **al punto (ii) *supra*** mencionado, es dable destacar que las sucesivas reformas legislativas han puesto de resalto la vinculación existente entre la renta “no computable” y la deducibilidad de los gastos asociados (véase por ejemplo, la alusión expresa a la aplicación o no del prorrateo previsto en el art. 80 y la posterior incorporación del segundo párrafo del art. 64 de la LIG). En consecuencia, es desacertado colegir —como hace la demandada— que la utilización de la terminología “no computable” carece de efectos respecto de la deducibilidad de los gastos vinculados a ella. Por el contrario, es razonable concluir que el legislador incorporó una nueva categoría de renta y determinó el tratamiento aplicable a sus gastos asociados, *a propósito* de la existencia de “rentas exentas” y “no alcanzadas” y sus correspondientes disposiciones en materia de gastos (art. 17 y 80 de la LIG).

Por lo tanto, resulta claro que los agravios de la demandada no pueden prosperar. Máxime, si se atiende a la **previsión expresa incorporada en el segundo párrafo del art. 64 de la LIG utilizada por el a quo para fundar su decisión y respecto de la cual la AFIP no se hace debido cargo**. En efecto, la ratificación del criterio fiscal equivaldría a desoír y deslegitimizar la letra de la ley en cuanto dispone que “(...) ***se deducirán*** —con las limitaciones establecidas en esta ley— todos los ***gastos necesarios*** para obtención del beneficio”, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación del gravamen (el destacado es propio).

En este sentido y recordando uno de los postulados básicos en materia de hermenéutica jurídica, atinente a que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”

sentido, el que tienen en la vida diaria, la Corte federal ha dicho que, *“si la ley emplea determinados términos, la guía interpretativa más segura es la que indica que ellos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito”* (del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que se remitió *in re* “Agua y Energía Eléctrica S.E. c/ Montelpare, Gustavo s/ expropiación incidente de desindexación”, sentencia del 8/7/03). Por otro lado, *“no puede entenderse que exista una redacción descuidada o desafortunada del legislador”* (arg. de Fallos: 328:456), toda vez que *“la inconsecuencia del legislador no se presume”* (Fallos: 306:721; 307:518 y 319:2249).

En esta línea, aquel Tribunal ha sostenido reiteradamente que, al interpretar una norma, se deberá dar pleno efecto a la intención del legislador, y que la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto (Fallos: 308:1745; 318:1887). En este sentido, cuando la norma no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquélla (Fallos: 311:1320; 315:727; 321:802; 326:756; 327:5614; 329:3470). De no respetarse este principio, podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (cfr. esta Sala *in re* “SAF Zona Franca y MSA c/ EN-DGA-Resol 4326/08 (Expte 606669/01) S/ Dirección General de Aduanas”, sent. del 29/12/20).

Ello, sin soslayar que, *“la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades”* (del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema, *in re* “Martínez, Alberto Manuel c/ Universidad Nacional de Tucumán”, sent. del 12/12/2006 (Fallos: 329:5621); esta Sala en autos “Bona Fields S.A. (TF 36.594I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 26/5/15 y *in re* “Turismo Doss S.A. c/ EN-AFIP-DGI Resol 1/11 (NGDE) s/ proceso de conocimiento”, sent. del 21/10/21, entre otros).

Es dable concluir entonces que la definición empleada por la LIG al calificar a los dividendos como ganancia “no computable” adquiere relevancia



respecto a la deducción de gastos —y aun cuando podría sostenerse que la referida calificación no implica *per se* la habilitación a deducirlos *puesto que el legislador decidió consignarlo de modo expreso*—, lo cierto es que el segundo párrafo del art. 64 de la LIG: (i) despeja toda duda con relación a las ganancias de tercera categoría y (ii) ratifica la improcedencia de asimilar la renta “no computable” a la “renta exenta” o “no alcanzada” en materia de gastos; todo lo cual conduce a rechazar el recurso interpuesto.

A mayor abundamiento —y considerando especialmente lo ocurrido en el *sub examine*—, no está de más recordar **la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria** (Fallos: 253:332; 315:820; 316:1115), y *se preserve la seguridad jurídica*, valor al que se le ha reconocido jerarquía constitucional (Fallos: 220:5; 243:465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218) y contra el cual conspira, “*la profusión de disposiciones y el vertiginoso cambio normativo que suele acontecer en materia de reglamentaciones tributarias, que impide establecer con la certeza que es exigible las reglas claras de juego (arg. Fallos 311:2082; 321:1248), que no son otra cosa que las normas a las cuales los contribuyentes pueden ajustar su comportamiento con el fin de desarrollar su actividad y su trabajo y así ejercer, en plenitud, su derecho de propiedad - garantizados, por otra parte, por los arts. 14 y 17 de la Carta Magna-*” (CSJN en la causa “Radiodifusora Mediterránea S.R.L. v. Estado Nacional”, sent. del 5/11/02).

En función a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).

9º) Que, por otro lado y en atención a lo dispuesto mediante proveído del 14/06/21, punto V, notificado a la demandada en igual fecha, al no haber cumplido dicha parte la carga de liquidar la tasa de justicia correspondiente, corresponde aplicar *astreintes* de \$100 diarios a partir del quinto día de practicada la notificación de la presente decisión, hasta la fecha de efectivo cumplimiento, las que deberán ser adicionadas al monto por tasa de justicia a abonar. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente y por considerar este Tribunal, que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, *in fine*, de la acordada CSJN 90/92, procede remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
**9548/2021 “TELECOM ARGENTINA SA (TF 70161445-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”**

Por todo las consideraciones *supra* desarrolladas, **SE RESUELVE:**
1º) rechazar el recurso interpuesto y confirmar el pronunciamiento apelado, con
costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN); y 2º) aplicar *astreintes* a la parte
demandada con el alcance dispuesto en el considerando 9º.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con la remisión al Representante del
Fisco ordenada en el considerando 9º, a sus efectos, y oportunamente, devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

Fecha de firma: 23/08/2022

Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROGELIO W VINCENTI, JUEZ DE CAMARA



#35588219#338606071#20220823111226511